

ETICA Y SOCIEDAD

La reflexión ética y su debate están de nuevo sobre el tapete. Ni el progreso científico-tecnológico y su dinámica autosuficiente que "funciona" como un nuevo dogmatismo, ni el continuo va y ven de un moralismo fundamentalista igualmente dogmático, han conseguido liberar al hombre de su libertad. No lo han liberado, en efecto, de la responsabilidad que le es inherente tanto a su actividad práctica como crítico-reflexiva. Ambos caminos y "tentaciones", en plena vigencia aún, esconden y vehiculan opciones éticas que conducen, entre otras cosas, a la **justificación de autoritarismos socio-políticos**. Los efectos destructores que de éstos se generan nos son bien conocidos:

-Una **tecno-ciencia absolutizada**, sin apertura ni elucidación ético-crítica, sin orientación hacia un proyecto de solidaridad social y ecológica, no conduce sino a antiguas y nuevas tecnocracias, a una instrumentalización de las personas, a una explotación indiscriminada del medio ambiente, a concepciones del Estado como la de la corriente neo-liberal que reduce sus funciones a la preservación y defensa de un Mercado auto-regulador, libre de todo control y omnipotente. El desmoronamiento de los regímenes socialistas en la Europa Oriental que esperamos anuncie a nivel político la apertura de un pluralismo democrático y participativo, permite también a algunos proyectar apresurada y descaradamente, a nivel económico, lo que denominan el "fin de la historia" o "fin de las utopías", que presenta y justifica a un modelo capitalista determinado como el único viable, efectivo, y por tanto, necesario y "eterno".

-Un **moralismo fundamentalista** que prescinde de toda justificación racional y de toda mediación teórica ajena a la "sacralidad" inmanente de un ayer de "revelación" o de "costumbres", no puede ser sino justificador de un legalismo autoritario, externo, y cerrado a todo debate crítico y participativo. La moral personal resulta en un intimismo individualista y sumiso. El cuestionamiento social pasa a ser sinónimo de subversión y de orgullo. La moral social pasa a ser sinónimo de "orden". El orden establecido, la seguridad nacional, se convierten en fines absolutos, justificadores de cualquier represión "necesaria" para

preservarlos. El poder estatal, a menudo personalizado, pasa a ser garante y propulsor de esta normatividad que él mismo define. El poder pasa a suplantar la razón hasta el punto que justicia, ley, y "orden", constituyen la misma y única realidad.

Estas posiciones extremas y toda la gama de sus modalidades, diversas en grado y forma, implican y esconden, pues, opciones éticas de graves consecuencias. La ética no había por tanto desaparecido en todo este tiempo, aunque su explicitación y justificación racional permanecían veladas. Su "retorno", necesario y urgente, al nivel del discurso y de la discusión crítica, representa uno de los desafíos mayores para nuestras sociedades, para nuestro planeta. Si en los países del mundo occidental llamados desarrollados la discusión ética se mueve fundamentalmente a nivel de la problemática ecológica, de la biología genética y de la experimentación médica, en América Latina el terreno privilegiado para el debate sigue siendo el de lo socio-económico y lo político. Estos acentos en cuanto a campos de aplicación no se excluyen mutuamente, y mucho menos en este momento en que el reconocimiento de la interdependencia de la realidad mundial es cada vez más evidente. Bastaría mencionar el narcotráfico y la deuda externa para sacar a relucir esta interconexión de desafíos y responsabilidades a escala mundial.

En nuestro caso particular, **República Dominicana**, los desafíos éticos que se nos presentan son cada día mayores. Una práctica histórica continua de caudillismo político, de regímenes autoritarios y centralistas, de irrespeto a la dignidad de la persona -especialmente de los más pobres- y a sus derechos más fundamentales, de corrupción administrativa creciente, de desprestigio de la propia legalidad e institucionalidad jurídica, de desprestigio de los cuerpos castrenses, ha ido sedimentando una mentalidad y una cultura donde la propia **conciencia del derecho individual y social está casi ausente** para la mayor parte de la población. La propia conciencia de la dignidad no es, pues, algo evidente. El poder y la "fuerza" del dinero, del status social o político-militar, del amiguismo y "enflavismo" a todos los niveles, forman ya parte de nuestras "costumbres". Su eficacia práctica, históricamente reconocida y asumida, en la solución de los "problemas" y "asuntos" particulares, y en la imposición de cualquier decisión, se convierte en su propia legitimación.

Esta perspectiva se agrava cuando consideramos la **degradación del sistema educativo** -forjador de valores por antonomasia-, acelerada en este último año por la falta de atención rápida de parte del gobierno a los reclamos salariales y a la falta de incentivo profesional de nuestros maestros. La deserción escolar, la casi-pérdida del año académico, el vaciamiento rampante de todas las facultades de pedagogía, no son, por

otra parte, sino una de las manifestaciones de un desprestigio social de lo académico-humanístico-cultural ante salidas más rápidas y efectivas de sobrevivencia y de promoción económica. Siendo éstas mejor garantizadas por estudios breves y más "funcionales" (en el área de la contabilidad, administración, informática...), por la actividad comercial y de servicios, o por la migración desesperada -reconocida como "única salida"- y riesgosa a los Estados Unidos y a Europa, principalmente. En esta última alternativa, el narcotráfico y la prostitución constituyen opciones cada vez más recurridas.

El tratamiento de la **problemática dominico-haitiana** y los planteamientos y reacciones que sobre la temática se han exteriorado, en particular como justificación del decreto de repatriación 233-91, no deja de ser una muestra representativa de la forma y nivel de (I)racionalidad con que se toma en consideración los Derechos Humanos, con que se discute el derecho y, por tanto, lo ético en sus implicaciones nacionales e internacionales. Basten algunas indicaciones:

Prevalece la manipulación politiquera de la problemática. Esta se dirige fundamentalmente a lo afectivo-biológico ("invasión pacífica", "van a comernos" como País, pérdida de nuestra "identidad" con la "fusión de razas"). Se desvía así la atención de la crisis nacional hacia el chivo expiatorio haitiano, incentivándose un nacionalismo "defensivo" y encubridor como el de las mejores épocas del trujillismo. El exacerbamiento del sentimiento de división y de antagonización prevalece sobre la razón y la identificación relacional. Se procede a la enemización y al etiqueteo afectivo del oponente y de sus "allados": se es hispanista y patriótico, o haitianófilo y "vende-patria". El nivel del debate, del diálogo crítico y de la argumentación racional abierta, se cierran.

-Con una seguridad y confianza absolutas se difunden cifras infladas y atemorizantes de la presencia haitiana en el país (1.2 - 2 millones) sin ningún estudio ni censo previo que las justifique.

-Se lanza un decreto que limita la repatriación a los haitianos menores de 15 años y mayores de 60, y su aplicación se ejecuta a través de redadas indiscriminadas, y muchas veces violentas, para haitianos de todas las edades. Se habla de una aplicación "humanitaria" del decreto, cuando el mismo implica en su propia lógica el que familias enteras puedan ser divididas con la expulsión de los menores y el que aquellos que han gastado más de 30 años de su vida sosteniendo la economía dominicana sean expulsados del país así como así.

-Se acude a la justificación de un mal con otro sin percatarse de la contradicción: se responde, por ejemplo, a las denuncias internacionales

de maltrato y sobre-explotación de los haitianos, aludiendo que los dominicanos que cortan la caña son sometidos a las mismas penurias; o se llega hasta ver como "normal" estas repatriaciones forzadas y con cierto maltrato, indicando que en peor forma son tratados y devueltos los dominicanos en Estados Unidos y Puerto Rico.

El que una "trama internacional" (a nivel de sectores ligados al turismo que compete con el mercado dominicano, por ejemplo) se pueda estar gestando contra el desarrollo del país, o el uso "político" que las autoridades haitianas puedan hacer igualmente, a nivel interno o externo, de esta problemática, no pueden eximirnos de una práctica de la justicia y de la defensa del derecho de toda persona, ni del favorecimiento de un diálogo racional a nivel nacional e internacional. Da que pensar el ver como se exacerbaban las divisiones entre ambos países justo en este momento tan especialmente favorable (con la democratización de Haití, con los proyectos conjuntos de ayuda económica internacional ligados a las resoluciones de la Convención de Lomé, con los esfuerzos de entrada al CARICOM, con las ventajas que representa para el mercado dominicano la apertura de un mayor intercambio comercial con Haití) para una mayor integración, que, respetando la soberanía y diversidad de ambas naciones, las una al proceso económico y político que se abre camino a nivel mundial.

El recurso a esquivar académicamente todos los cuestionantes y desafíos éticos aquí indicados afirmando que "nuestra realidad es sumamente compleja", o el retratarla de un modo popular diciendo que "vivimos en el País de las Maravillas", no constituye sino un nuevo mecanismo de "sobrevivencia" y otra modalidad "airosa" de seguirnos riendo de nuestra propia miseria. Hay un dejo fuerte de fatalismo -de que "esto no lo arregla nadie", de renuncia a la razón- que acompaña a estas afirmaciones, y que acaba justificando nuevamente la perpetuación de lo actual.

Frente a esta opción ética al revés, que paraliza y que conduce rápidamente al imperativo categórico del "sálvese quien pueda", nosotros preferimos seguir **unando esfuerzos** con los que apuestan y trabajan por una sociedad dominicana más consciente, razonable, y defensora del derecho y de sus derechos. En este proceso saludamos **con esperanza** ya anticipada el crecimiento de un periodismo crítico y reflexivo a nivel nacional, al aumento de espacios de discusión y debate de la realidad del país a nivel académico y social, el fortalecimiento de las demandas de mayor participación social y política, y de lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos ciudadanos, que encuentra su mejor expresión en la sociedad civil en el desarrollo de las organizaciones populares, sujeto y campo de una formación y operativización efectivas de una posible democracia.